

Señores

**JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. (REPARTO).**

E. S. D.

**REFERENCIA:** ACCIÓN DE TUTELA

**ACCIONANTE:** ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

**ACCIONADO:** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**ASUNTO: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía número 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección de notificaciones [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co) actuando en calidad de apoderado especial de **ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.** conforme se acredita con el documento adjunto al presente escrito, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Nit. **860.027.404-1** y, con dirección de notificación [notificacionesjudiciales@allianz.co](mailto:notificacionesjudiciales@allianz.co) tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se aporta con el presente documento. Por medio del presente escrito de manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de presentar **SOLICITUD DE MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL** de la sentencia del 29 de noviembre de 2024 proferida por La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Para que se conceda el amparo del derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por el accionado al interior del proceso verbal instaurado por el señor Jorge Mario Roldán Corrales en contra de mi mandante y que cursó bajo la radicación No. 2023053658.

**I. SOLICITUD DE MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, por ser necesarias y de ostensible urgencia para la protección de los derechos fundamentales de mi representada, así como para evitar la materialización de un perjuicio inminente e irremediable, respetuosamente solicito al Despacho ordenar como medida provisional que se suspenda

provisionalmente la ejecutoria y ejecución de la sentencia única instancia del 29 de noviembre de 2024 proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia dentro del proceso verbal promovido por el Señor Jorge Mario Roldán Corrales contra mi representada que se adelantó bajo el radicado No. 2023053658.

Como consecuencia de los hechos narrados en la acción de tutela, el suscrito procede a solicitar al Despacho el decreto de una medida provisional de suspensión de los efectos de la sentencia dictada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia incurre en las siguientes vías de hecho: (i) **Defecto Procedimental:** En tanto el Lucro Cesante y daño emergente no fueron objeto de reparo frente a la Sentencia de Primera Instancia. Luego, se desconoce la pretensión impugnativa. (ii) **Defecto Procedimental:** Se incurrió en un yerro procesal derivado de la falta de congruencia, toda vez que, la Delegatura desbordo sus facultades ultra y extra petita atendiendo a que emitió una decisión de fondo completamente ajena a la motivación de la demanda y las pretensiones en ella contenidas, reconociendo un amparo de la póliza de vida actual No. 022106757 sobre el cual no se solicitó su reconocimiento. Todo lo anterior, a pesar de que la parte demandante buscaba que la póliza expedida no tuviera solución de continuidad restableciendo la totalidad de amparos inicialmente contratados y (iii) **Defecto Sustantivo:** La Delegatura decidió condenar a Allianz Seguros de Vida S.A. con cargo al amparo de incapacidad, inutilización o desmembración por enfermedad o accidente aun cuando no se incorporó al proceso un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por una junta de calificación de invalidez debidamente reconocida tal y como lo establece el artículo 2.6.1.4.2.8 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012. Ante la existencia de la mencionada afectación, la Jurisprudencia ha entendido que procede el decreto de medidas provisionales en sede de tutela:

*“(…) Ahora bien, la facultad de proferir medidas provisionales se encuentra habilitada desde la presentación de la acción de tutela hasta antes de proferir sentencia, “pues al resolver de fondo deberá decidir si tal medida provisional se convierte en permanente, esto es, definitiva o si por el contrario, habrá de revocarse.” Las medidas provisionales no tienen por objeto anticipar o condicionar el sentido del fallo e incluso pueden ser reversadas en algunos*

casos. **Por el contrario, sirven como una herramienta excepcional al del juez constitucional, cuando este advierta que una amenaza cierta, inminente y grave sobre un derecho fundamental o el interés público requiera su intervención inmediata** (...)”<sup>1</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Aunado a lo anterior, en el presente caso se cumplen los requisitos para que se suspendan provisionalmente los efectos de la sentencia fechada 29 de noviembre de 2024 proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, toda vez que tiene como fin evitar que se agrave una situación consistente en pagar una obligación injustamente impuesta en la sentencia, pues no quedó debidamente comprobados los presupuestos jurídicos para tal decisión. Frente a este particular, la Corte Constitucional ha sostenido que el decreto de medidas provisionales es procedente aun cuando ya se materializó un daño, como en este caso y, que, su finalidad es la de evitar el mismo se agrave:

“(…) La Corte Constitucional ha sostenido que resulta procedente el decreto de medidas provisionales: “(i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) **cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación**”. Esto por cuanto la potestad de decretar medidas provisionales tiene como finalidad **“proteger los derechos constitucionales fundamentales, antes de pronunciarse definitivamente en el fallo, pues con ella se busca evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, que ésta se torne más gravosa** (...)”<sup>2</sup> (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Adicionalmente, en el presente caso, el despacho podrá constatar que “(i) la afectación al derecho fundamental es plausible; (ii) que el transcurso del tiempo pone en riesgo dicha garantía constitucional; y (iii) la medida cautelar no generaría un daño desproporcionado a

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Auto 259 del 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

<sup>2</sup> Corte Constitucional, Sentencia SU – 096 del 17 de octubre de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

*quien debe soportarla*<sup>3</sup>, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Se profirió sentencia única instancia dentro de la acción de protección al consumidor tramitado bajo el radicado 2023053658 y expediente 2023-2293, en donde, claramente se incurrió en defecto procedimental y defecto sustantivo.
2. El transcurso del tiempo en el presente caso implicaría que por la vía judicial se obligue o ejecute a la compañía a efectuar un pago por una condena que fue emitida con violación al debido proceso, configurándose evidentemente, una carga que no debe ser soportada por ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
3. El decreto de la medida provisional solicitada no genera ningún daño ni afectación al señor Jorge Mario Roldán Corrales, comoquiera que, la medida no está imponiendo cargas desproporcionadas más que la espera a la resolución de la acción constitucional antes de pensar si quiera en pedir la ejecución del fallo. Luego, reconocerse, se incurre en un enriquecimiento sin justa causa a costa de mi representada ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

## **II. PETICIÓN**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, por ser necesarias y de ostensible urgencia para la protección de los derechos fundamentales de mi representada, así como para evitar la materialización de un perjuicio inminente e irremediable, respetuosamente solicito al Despacho:

**PRIMERO: ORDENAR** como medida provisional que se suspenda provisionalmente la ejecutoria y ejecución de la sentencia única instancia del 29 de noviembre de 2024 proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia dentro del proceso verbal promovido por el Señor Jorge Mario Roldán Corrales contra mi representada y, que se adelantó bajo el radicado No. 2023053658.

---

<sup>3</sup> Corte Constitucional Auto A – 826 del 26 de octubre de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

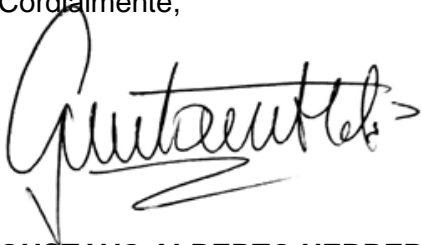
### III. NOTIFICACIONES

A la parte accionada, Superintendencia Financiera de Colombia Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, con domicilio principal en la Calle 7 No. 4-49 de la ciudad de Bogotá D.C. y con correo electrónico [jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co](mailto:jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co)

Mi representada, ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. en la Carrera 13 A No. 29 - 24, Piso 9, de la ciudad de Bogotá D.C. Correo electrónico: [notificacionesjudiciales@allianz.co](mailto:notificacionesjudiciales@allianz.co)

Al suscrito, en la Carrera 11A No. 94A-56, Oficina 402 de la ciudad de Bogotá D.C.; correo electrónico: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Alberto Herrera Avila', with a stylized flourish at the end.

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**

C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.